

Martes, 14 de noviembre de 2000.

## LOS CIENTÍFICOS DEMANDAN MÁS INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN

### EL MUNDO

Concretamente, los científicos firmantes del texto piden un aumento de las inversiones, que actualmente equivalen al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), hasta alcanzar el doble, un 2% del PIB.

El texto íntegro del manifiesto leído es el siguiente:

1. Gracias a los avances basados en el conocimiento científico, la vida diaria en los países desarrollados difiere substancialmente de la existente hace tan solo cien años. Estos avances rodean continuamente nuestra vida, incluso en ausencia de nuestra percepción: las vacunas, los antibióticos, los ordenadores, las tarjetas de crédito, las telecomunicaciones, el código de barras, los modernos saneamientos urbanos, el control del tráfico o las imágenes de resonancia magnética, son elementos familiares de la vida diaria que han surgido como consecuencia de la actividad científica y el desarrollo tecnológico. Es deber, por tanto, de la sociedad contribuir a crear esa riqueza y garantizar su desarrollo, porque ella misma es la principal beneficiaria.

2. En el transcurso del siglo XX se ha producido un extraordinario cambio en la valoración social de la Ciencia que adquiere, por vez primera, una realidad multidimensional más allá de la concepción tradicional que la asociaba exclusivamente a cultura. Los responsables de las decisiones públicas han entendido que la investigación científica produce cambios fundamentales en todos los ámbitos sociales; baste como ejemplo aquellos acaecidos en la industria, la agricultura o la medicina. La Ciencia, tanto la básica como las aplicaciones que en ella se sustentan, se identifica con bienestar social y beneficio económico, y los binomios Ciencia y Tecnología e Investigación y Desarrollo se han convertido ya en términos inseparables y pilares de nuestro futuro.

3. Desgraciadamente en España, la Ciencia padece una serie de males crónicos que son el resultado de una tradición histórica que ha generado hábitos culturales que es preciso modificar, así como de la insuficiencia de unos recursos financieros que es preciso aumentar. A lo largo del decenio 1990-2000, y con gobiernos de distinto signo político, la inversión pública en I+D en pesetas constantes, excluyendo el gasto en equipos militares, ha disminuido. A su vez, el sector privado apenas ha logrado sostener el nivel de las inversiones iniciales.

La insuficiente valoración pública y las restricciones financieras se traducen en la dificultad para participar en el liderazgo científico y contribuir adecuada y competitivamente en proyectos internacionales. Además, generan una grave descompensación de la balanza de pagos tecnológica, reducen el valor añadido de los productos, contribuyen al desequilibrio de la balanza comercial, y restringen la creación de

oportunidades de empleo cualificado. No fomentar la investigación condiciona negativamente nuestro futuro tecnológico y económico y pone en peligro nuestra existencia como país dueño de su futuro. La alternativa de convertirnos en un país de servicios, centrado principalmente en sus recursos naturales, además de representar una actitud claudicante no produciría los resultados satisfactorios esperados: en los países avanzados de nuestro entorno el modelo de desarrollo incluye tanto los servicios como la investigación.

4. Resulta difícil entender el desarrollo científico sin la concurrencia en su financiación del Estado, las empresas y otras formas de organización social como son las fundaciones. La incentivación del Estado, el interés de las empresas y la ilustrada generosidad de los ciudadanos constituyen, efectivamente, el bastidor financiero en el que descansan los modelos más eficaces de desarrollo científico en el siglo que comienza. La apuesta que proponemos no es, por lo tanto, solamente una apuesta política sino también, y sobre todo, una apuesta social. Los individuos y la sociedad civil española, en sus distintas formas de organización empresarial, fundacional o asociativa, y los gobiernos, que han de escuchar a una opinión pública cada vez mejor informada de la importancia que para su bienestar tiene la investigación, deben apoyar este desarrollo.

5. En los últimos veinticinco años, la sociedad española ha protagonizado avances extraordinarios en el campo político, económico y social que nos permiten aspirar a una incorporación plena a ese «primer mundo» formado por apenas una docena de países industrializados con sistemas políticos de democracia avanzada. En el marco de nuestra Constitución hemos ido afrontando cuestiones históricas y ensayando soluciones para lo que un día se denominó como «los males de España».

Sin embargo, un mal continúa aquejando, todavía, a nuestro país: el retraso científico y tecnológico. Es condición necesaria para su solución que tanto la Sociedad como el Estado, comprendiendo el problema, apoyen y estimulen el desarrollo de proyectos científicos y de innovación tecnológica de modo similar a como lo hacen los países líderes de la Unión Europea, lo que, en términos económicos, supondría prácticamente doblar las cifras realmente dedicadas a I+D en la actualidad, elevando la inversión que se precisa del escaso 1% actual al 2% del Producto Interior Bruto. Si se quiere afrontar con seriedad el problema histórico de nuestro retraso científico y tecnológico, tanto la Sociedad como el Estado tienen que comprometerse a resolver, a medio plazo y de forma estable y progresiva, este desfase entre los recursos actuales y los necesarios.

6. La Democracia y la Ciencia constituyen las dos vías por excelencia para el progreso de los países; la primera de ellas ya está consolidada en España. Continuando la llamada que hacía, hace cuatro años, el «Manifiesto de El Escorial», este es el momento para que asumamos los compromisos que requiere el avance científico. La comunidad científica española, a la que se debe facilitar la incorporación de una nueva generación de jóvenes científicos, la más numerosa y mejor preparada de nuestra historia, está dispuesta a trabajar para conseguir este objetivo. ¿Lo están también el Estado, el sistema financiero, las empresas y las fundaciones españolas?. El comienzo del siglo XXI puede ser la gran oportunidad para formalizar un nuevo pacto social que contribuya de manera decisiva al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y a la mejora de la calidad de vida.

Madrid, a 13 de noviembre de 2000